

Mauricio Filiberti Edenor

Gustavo Castagnino Genneia

Claudio Cunha Enel Argentina



Andrés Scarone Compañía MEGA



Jorge Dimópulos Tecpetrol











LAS TRES DIMENSIONES PARA ABORDAR LA TRANSICIÓN ENERGETICA

EL AUTOR ABORDA LA TRANSICIÓN INICIALMENTE PONIENDO EL FOCO EN LAS DISTINTAS REALIDADES QUE SE OBSERVAN A NIVEL MUNDIAL, LUEGO FOCALIZA EN ARGENTINA Y FINALMENTE AFIRMA QUE LAS EMPRESAS DEBERÁN ENFRENTAR ASPECTOS TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS Y DE GOBERNANZA CORPORATIVA.

< OP OPINION

EN EL ENERGY DAY convocado por Econojournal en noviembre, tuvimos la oportunidad de delinear, junto con un grupo de ejecutivos del sector de los hidrocarburos en Argentina, los principales desafíos que plantea la transición energética para este sector.

No fue difícil coincidir en que, a nivel global, debemos accionar rápidamente sobre los vectores que han producido el calentamiento global para mitigar el impacto de las emisiones de carbono a la atmósfera y poder razonablemente cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para 2050. También estuvimos de acuerdo en que, siendo que a nivel global el mayor peso de las emisiones recae en el sector energético (75%), el principal desafío que tenemos por delante se vincula con lo que comúnmente llamamos «transición energética», es decir, el gradual reemplazo de los combustibles fósiles por energías limpias en un plazo compatible con los objetivos del Acuerdo de París de 2050. En este sentido, identificamos tres dimensiones para abordar la «transición energética» desde la industria de los hidrocarburos: (i) un desafío global, (ii) un desafío país y (iii) un desafío a nivel empresas y consumidores.

En la primera (que llamamos la "dimensión global"), debatimos si hay "una" o "varias" transiciones, producto de las asimetrías en las emisiones entre los países desarrollados (Estados Unidos, UE, Japón, Corea) y los países en desarrollo (China, India, Brasil), como quedó claramente expuesto una vez más en la reciente COP26 de Glasgow. Aquí, la discusión que planteamos tiene que ver con quién debería asumir los costos de la transición: (i) los Estados a través de subsidios, (ii) las empresas a través de un «carbon tax global» o (iii) los consumidores en forma directa o indirecta a través del aumento de los precios de la energía.

En el desafío a nivel país, coincidimos una vez más en que Argentina cuenta con los recursos para enfrentar la transición energética, ya que, si bien nuestro país tiene una matriz energética dominada por los hidrocarburos fósiles, la casi nula participación del carbón en esa matriz y la posibilidad creciente y comprobada de producir petróleo y sobre todo gas natural de fuentes no convencionales nos posicionan (nos darían la llave) para administrar nuestra «propia» transición energética.

Si a esto le sumamos la gran disponibilidad de recursos renovables, como la energía eólica y la solar, con abundantes y calificados recursos (donde ya dimos el primer paso –con nuestras idas y venidas producto de la macro, pero primer paso al fin—), tenemos la posibilidad de un reemplazo gradual de combustibles fósiles y una diversificación cada vez más marcada de nuestra matriz energética (complementada por nuestros grandes desarrollos hidráulicos y nuestro siempre modesto aunque sostenido desarrollo nuclear). Incluso el reciente interés de inversores internacionales para desarrollar un polo de hidrógeno verde en nuestro país va en línea con la necesidad de avanzar con una matriz ampliamente diversificada.

En particular, coincidimos en que el desarrollo de Vaca Muerta puede ser la llave para sostener esa

Vaca Muerta puede ser la llave para sostener esa «transición energética» desde una natural evolución hacia combustibles más limpios y con menos huella de carbono pero, además, mediante la generación de saldos exportables que contribuyan a la «transición energética» regional, como podría ser el caso de la exportación de LNG desde plantas de licuefacción en Argentina.

desarrollo de Vaca Muerta requerirá cuantiosas inversiones en infraestructura, sobre todo en materia de gas natural (tanto gasoductos troncales como plantas de LNG), pero también la creciente electrificación de nuestra matriz energética necesitará mayor desarrollo de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.

Esto está planteado, de alguna forma, en el reciente informe preparado por la Secretaría de Energía junto con el Ministerio de Ambiente, que resume los Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030. Es un documento que plantea algunos escenarios al 2030 con mayor participación de los renovables en la matriz energética y muestra qué resultados se podrían alcanzar para cumplir con los compromisos del país bajo el Acuerdo de París.

El desafío a nivel empresas, sean estas globales, regionales o aun nacionales, es mayúsculo e incluye aspectos relevantes: (i) tecnológicos, (ii) financieros y (iii) de gobernanza corporativa.

Desde lo tecnológico, las empresas de hidrocarburos deberán dedicar cada vez más esfuerzos para producir un barril de petróleo equivalente (BOE) con menor huella de carbono (medido por tonelada de CO2 por BOE producido) de manera de poder atraer el capital necesario para financiar esas nuevas inversiones.

Desde lo financiero, probablemente no les alcance con un barril más bajo en emisiones sino que, además, deberán buscar alternativas para volverse «net zero» desde las perspectivas de sus inversores y accionistas. Seguramente, el camino sea a través "

TENEMOS LA
POSIBILIDAD DE
UN REEMPLAZO
GRADUAL DE
COMBUSTIBLES
FÓSILES Y UNA
DIVERSIFICACIÓN
CADA VEZ MÁS
MARCADA DE
NUESTRA MATRIZ
ENERGÉTICA.

REVISTA**TRAMA 40** #14

0P >



"

LA ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
RELACIONADOS
CON LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA SE
VOLVERÁ CADA VEZ
MÁS RELEVANTE
EN LA MATRIZ DE
RIESGOS DE LAS
COMPAÑÍAS
DE ENERGÍA.

de inversiones diversificadas en un portafolio más verde que les permita contrarrestar sus emisiones de carbono producto de la extracción de combustibles fósiles o la utilización de nuevas tecnologías de captura de carbono.

Finalmente, desde la gobernanza corporativa, las empresas de hidrocarburos deberán estar muy atentas a las demandas de sus inversores, accionistas, clientes y consumidores para cumplir con una agenda de políticas activas en materia de Environmental, Social and Governance, cada vez más exigente en términos de transparencia, tanto en el proceso de toma de decisiones como en la implementación de dichas políticas. También deberán sujetarse a métricas comprobables y cumplirlas en los plazos previstos, en línea con los requisitos de transparencia y efectividad que mencionamos, y serán evaluadas cada vez más rigurosamente en relación con el disclosure de sus objetivos de «net zero», con la consiguiente mayor exposición y responsabilidad corporativa de sus directores y ejecutivos. Por esta razón, la administración de riesgos relacionados con la transición energética se volverá cada vez más relevante en la matriz de riesgos de las compañías de energía, y por último las empresas de hidrocarburos serán fuertemente interpeladas en el manejo de crisis derivadas de desastres ecológicos o con alto impacto ambiental, debiendo asegurar respuestas inmediatas, efectivas y conducentes.

En este sentido, también estamos asistiendo a una creciente litigiosidad en asambleas de accionistas y acciones de clase a nivel mundial y el mayor involucramiento de tribunales locales e internacionales, como el caso del Tribunal de la Haya en relación con el caso Shell.

Finalmente, y a modo de cierre, nos preguntamos qué vendrá primero, si el mercado o la regulación. Frente a esta incertidumbre, desde el lado de la regulación vemos las enormes dificultades de coordinación entre regulaciones locales y supranacionales que atiendan a «una» o a «varias» transiciones. Pero, desde el lado del mercado, tampoco queda claro si este impondrá sus reglas en forma aleatoria y anárquica, y si, además, contará con la ayuda de tribunales y jueces cada vez más influidos y sensibilizados por la temática del cambio climático.

En cualquier caso, lo que ninguno de los actores del sector ponemos en duda es que la dinámica de la «transición energética» ya está instalada en el sector y requerirá todos nuestros esfuerzos para atenderla en forma razonablemente ordenada y contribuir desde el sector a cumplir con los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París para 2050. ×

(*) Socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a cargo de la práctica de «Petróleo y Gas» con más de 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. Actualmente, también actúa como coordinador de la plataforma de servicios legales «Acción Climática y Negocios Sustentables», recientemente lanzada para atender las necesidades de la transición energética y el cambio climático de las diversas empresas e inversores que componen su cartera de clientes.

REVISTATRAMA 58 #14

ED > ENERGY DAY





CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA UNA INDUSTRIA CLAVE PARA LA TRANSICIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES: CÓMO REDESPERTAR A UN SECTOR DORMIDO

REFERENTES DEL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES COINCIDIERON EN LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO ESTABLEZCA POLÍTICAS CONCRETAS PARA LIBERAR LA PRIORIDAD DE DESPACHO QUE TIENEN PROYECTOS QUE NO SE CONSTRUYERON. ADEMÁS. DEMANDARON LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE. DE TODOS MODOS. ADVIRTIERON QUE SIN UN ORDENAMIENTO A MEDIANO O LARGO PLAZO DE LAS DISTINTAS VARIABLES MACROECONÓMICAS AL SECTOR LE SERÁ DIFÍCIL DESPEGAR.

Por Roberto Bellato

REVISTATRAMA 60 #14

ED> —

Juan Cruz Azzarri Gustavo Castagnino





Gustavo Castagnino

EL MUNDO ESTÁ EMBARCADO en el compromiso de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En el ámbito de la energía se apuesta por la descarbonización de la matriz energética. Hay metas temporales que los países fueron acordando, no sin discusiones y contratiempos, en las conferencias convocadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La COP21 realizada en París en 2015 fue un hito en este sentido y este año en la COP26 de Glasgow nuevamente el mundo discutió qué hacer ante el cambio climático y cómo cuidar el planeta. No es ninguna novedad que la agenda de la transición energética llegó para quedarse. Cada vez son más los países que ponderan la generación de energía a partir de fuentes renovables. En la Argentina está vigente una normativa que establece un régimen de fomento para el sector e impone como objetivo que hacia el año 2025 un 20% de la matriz local sea verde. Más allá de que finalmente se cumpla o no esta meta, lo cierto es que los recursos naturales que hacen falta para generar energía limpia están. El sur del país cuenta con uno de los mejores vientos que hay en el planeta y en el norte hay una excelente radiación solar para aprovechar la energía fotovoltaica. También el país tiene un valor diferencial para generar energía verde a partir de pequeñas hidroeléctricas, biomasa y biogás. Como sucede con Vaca Muerta o la minería, una vez más los recursos naturales con los que cuenta el país se destacan en el mundo.

Sin embargo, en la Argentina las energías renovables necesitan salir de la siesta en la que entraron con la crisis económica de 2018 y la pandemia. No alcanza con tener buenos recursos. En la industria hay un consenso claro respecto de que hacen falta

otras condiciones para reimpulsar más proyectos. En el panel «Renovables: cómo reactivar el desarrollo en la Argentina. El hidrógeno como alternativa» del Energy Day –evento organizado por *EconoJournal* a fines de noviembre–, distintos ejecutivos de empresas de energías renovables coincidieron en que este sector necesita señales políticas concretas para avanzar con nuevos desarrollos.

ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

En el panel participaron Martín Brandi, CEO de PCR; Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia y vicepresidente de la Cámara Eólica Argentina (CEA); Claudio Cunha, *Country Manager* de Enel Argentina; José Bazán, socio del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi; y Juan Cruz Azzarri, socio fundador del estudio MHR ABOGADOS. Los ejecutivos coincidieron en la potencialidad que tienen las energías limpias en el país y en las necesidades para que se establezcan reglas de juego a largo plazo. Estabilidad macroeconómica, previsión, acceso a las divisas y mejores condiciones para conseguir financiamiento a tasas sostenibles son demandas que se repiten seguido entre las compañías.

Los disertantes también compartieron el reclamo para que, en el corto plazo, el gobierno avance lo más rápido posible en políticas para dinamizar este sector. Entre las medidas que más mencionaron aparece la de liberar la prioridad de despacho que hoy tienen proyectos adjudicados en las distintas subastas del programa RenovAr y que no se construyeron. Según los cálculos que hacen en el ámbito privado y en el gobierno, hay entre 1.500 Mw y 2.000 Mw que están ocupando prioridad de despacho. Muchos de ellos en realidad no son proyectos concretos sino







Hidrógeno verde Reclaman una nueva ley

Juan Cruz Azzarri, del estudio MHR Abogados, dio su punto de vista sobre el desarrollo del hidrógeno verde, comparándolo con las energías renovables y la aplicación de la Ley 27.191. «Hoy existe una ley para el hidrógeno verde, pero hay que modificarla porque es vieja. Tenemos la demostración de la importancia de una buena ley como la 27.191, que ya atravesó tres administraciones, porque fue aprobada en el gobierno de Cristina Fernández, fue aplicada en el de Mauricio Macri y se sigue aplicando en el de Alberto Fernández. En el hidrógeno verde necesitamos una ley parecida para que haya una política de Estado en el futuro».

que son solamente carpetas acumuladas en la Secretaría de Energía porque, por distintos motivos, nunca se llevaron a cabo. Además, los ejecutivos coincidieron en la necesidad de que el gobierno avance en la ampliación de las redes de transporte eléctrico para evacuar la generación de energía renovable.

LIBERAR PARA CRECER, TRANSPORTAR PARA AUMENTAR

Claudio Cunha es el Country Manager de Enel Argentina y contó que el grupo italiano tiene 50.000 Mw de capacidad instalada de energías renovables en el mundo, de los cuales 16.000 Mw están en Latinoamérica, y que planea multiplicar por tres esa cifra para el año 2030. Destacó que para desarrollar las renovables en la Argentina «se necesita mayor transparencia y estabilidad en el marco regulatorio». En cuanto a las políticas públicas, añadió que «tenemos la necesidad de desarrollar el sistema de transporte para llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume, pero se necesitan señales políticas». «La Ley está, lo que necesitamos son señales específicas como nuevas licitaciones para construir líneas de transmisión. Si no logramos destrabar esto, lo más probable es que no podamos llegar a cumplir con las metas que marca la normativa», agregó. «El capital privado puede hacer las obras una vez que tenga reglas claras establecidas. Si necesitamos construir 1.000 kilómetros de una red de transmisión, queremos saber cómo van a ser remunerados, con qué contratos y a cuántos años, por ejemplo», explicó Cunha.

Por su parte, Martín Brandi detalló que PCR es una empresa petrolera que nació hace 100 años en la Cuenca del Golfo San Jorge, pero que a partir de la aprobación de la Ley 27.191 de 2015 decidió ingresar al mercado de las energías renovables como generadora. «Fue una transición que atravesamos de manera muy rápida. De no tener nada, pasamos a contar con 330 Mw eólicos en operación comercial y recientemente logramos la adjudicación de capacidad de transporte para tres proyectos que buscan abastecer a clientes industriales», sostuvo el ejecutivo. «Continuamos produciendo hidrocarburos, que es algo que todavía el mercado necesita. El gas es un combustible que facilita mucho la generación de renovables y queremos ser cada vez más una empresa que se dedique a desarrollar energías renovables con foco idealmente en clientes privados. Creemos que el mercado argentino tiene una madurez mínima para depender de los clientes industriales y no necesitar tanto de subastas a nivel nacional de contratos de abastecimiento», agregó el CEO de PCR. Al momento de identificar los problemas a resolver, Brandi aseguró que «estamos viendo claramente un escollo, compartido por los actores de esta industria, que es la falta de capacidad de transporte». También advirtió sobre un uso deficiente de la infraestructura existente. «Si se estudia la real simultaneidad de despacho de distintos proyectos, seguramente haya lugar para incorporar algunos megas más hasta que se puedan lograr las obras necesarias en infraestructura», remarcó. Brandi detalló que hay proyectos de RenovAr que no se hicieron de las rondas 1, 1,5 y 2 y que probablemente no se vayan a materializar. «Tener esa capacidad de transporte bloqueada no tiene mucho sentido»,

Martín Brandi José Bazán Claudio Cunha







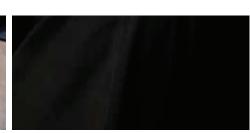
Instrumento financiero con impacto ambiental positivo La alternativa de los bonos verdes

Los bonos sociales, verdes y sustentables son una novedad en el mercado de capitales en la Argentina. La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General N° 788/19, donde estableció los lineamientos para la emisión de valores negociables de estos bonos verdes. Se trata de un nuevo instrumento financiero que les permite a las empresas obtener rentabilidad, a la vez que generan impactos ambientales y sociales positivos y, de esta forma, pueden alcanzar alguno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. El primer bono verde en la Argentina se emitió en los primeros días de 2018 para financiar el Parque Eólico Arauco, ubicado en la provincia de La Rioja. Las últimas compañías que emitieron un bono verde fueron Genneia y PCR, y lo hicieron en el mercado local e internacional. José Bazán, socio del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, contó que con el trabajo conjunto entre la CNV, el Ministerio de Economía, los mercados, las calificadoras de riesgo y los estudios de abogados se alcanzó un marco

regulatorio que permite alcanzar los requisitos solicitados a nivel mundial desde los organismos financieros para que una compañía acceda a un bono verde corporativo. El abogado explicó que estos requisitos tienen que ver con que «los bonos verdes tienen que ser trazables, no pueden utilizarse para otro fin que no sea el comprometido. También tiene que haber un compromiso de las compañías de reportar todas las mejoras en el medio ambiente que se dan durante la vida del bono. Finalmente, otro requisito es que tiene que haber una segunda opinión y esto el mercado local lo desarrolló muy rápido y hay segundas opiniones que certifican el uso que se les da a los fondos». Además, añadió que «esto permitió un desarrollo incipiente en la Argentina y a medida que la macroeconomía y las regulaciones sobre el mercado de cambios se alivien, los bonos verdes son una tendencia imparable. Desde nuestra firma armamos una plataforma específica para este tipo de clientes porque creemos que en esto ya no hay vuelta atrás».









"

DESDE LAS PASO DE 2019 VEO POCA ACTIVIDAD EN LA SECRETARÍA DE ENERGÍA PARA LIBERAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE INCENTIVOS ECONÓMICOS Y EVITANDO LAS FUERTES MULTAS.

Juan Cruz Azzarri

sostuvo. Por otro lado, aseguró que, cuando las renovables comienzan a sumar penetración, se pueden hacer estudios de simultaneidad que consisten en precisar cuán probable es que se despachen todos los proyectos del país en potencia nominada al mismo tiempo. «La probabilidad de ocurrencia de eso es cero, entonces suponer que se va a dar es un escenario muy conservador. Con el tiempo, Argentina va a ir teniendo una gimnasia en la administración de un parque renovable grande y eso permitirá encontrar que hay algo más de lugar que no deja de ser un pequeño puente hasta que llegue la nueva infraestructura», añadió.

Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de la compañía Genneia y vicepresidente de la Cámara Eólica Argentina (CEA) –entidad que agrupa al 75% de la generación eólica del país-, también puso el foco en la necesidad de liberar capacidad de transporte. «En el país hay una cantidad de proyectos del RenovAr que aún no han avanzado y están en diferentes estadios. Venimos dialogando en buenos términos con las autoridades de la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Energía Eléctrica, y estamos avanzando en normas que permitan la liberación de esa capacidad de transporte», comentó. «La resolución también podría dar la oportunidad a aquellos actores que por algún motivo tuvieron grandes demoras en sus proyectos. Hay muchas razones por las cuales varios proyectos no han avanzado. Es decir, no solamente están los proyectos que, por decirlo de alguna manera, se subieron al tren de las renovables con la idea de vender los proyectos del RenovAr». Castagnino contó que el sector está esperando una definición por parte del Poder Ejecutivo para saber, a través de una resolución de la Secretaría de Energía, cuál es la penalidad que debe afrontar un proyecto si se da de baja. Desde su punto de vista, la penalidad tiene que ser lo suficientemente virtuosa para atraer a que los dueños de esos proyectos se den de baja, se otorguen prórrogas o se permitan cambios para que esos proyectos tengan viabilidad y poder continuarlos. Juan Cruz Azzarri, del estudio MHR Abogados, destacó que la estabilidad económica es lo más básico para los proyectos, y que después tienen que incorporarse regulaciones concretas para el

sector. «Desde las PASO de 2019 veo poca actividad en la Secretaría de Energía para liberar la capacidad de transporte a través de incentivos económicos y evitando las fuertes multas del programa RenovAr. Desde mi punto de vista, esas penalidades eran excesivas si las comparamos con las de los proyectos bajo los contratos de Participación Público-Privada (PPP), que tenían garantías más accesibles para las compañías», sentenció Azzarri. De todos modos, el director de Genneia destacó que «el mercado corporativo (Mercado a Término de Energías Renovables) va a ser el principal driver de crecimiento de las energías renovables en los próximos años. Hay una cantidad enorme de empresas, argentinas y multinacionales con base en Argentina, que están necesitando cambiar su matriz energética, empezar a comprar renovables, porque tienen una presión muy fuerte a nivel internacional y local para llegar a ciertos objetivos y metas si quieren encarar una transición total de sus plantas productivas».

LA FRAGILIDAD DE LA MACRO

Respecto de la crítica situación económica que atraviesa el país –un punto que marcaron con énfasis todos los panelistas–, Cunha (Enel) destacó: «Todos sabemos que hay una restricción fuerte en los dólares, pero las inversiones requieren traer equipamiento del exterior. Creemos que hay que buscar una forma de viabilizar esto porque, con todo el potencial que tiene el país, se genera energía que puede ser exportada y así obtenerse divisas. Argentina tiene un lugar privilegiado dentro de América del Sur porque conecta varios países».

Sobre este punto, Azzarri (MHR Abogados) señaló que «sin estabilidad macroeconómica ningún financiamiento se torna muy viable en la Argentina. Con un riesgo país tan alto y con las restricciones cambiarias, nuestra experiencia indica que cuando un proyecto avanza a instancias de financiamiento, los organismos financieros ponen muchos requisitos a los proyectos y los financiamientos se vuelven muy caros. Es decir, sin estabilidad económica seria y sin que la macro esté saneada y el riesgo país baje, los financiamientos se vuelven muy caros». *